



RESUMEN Y PROSPECTIVA

- **Los Zambada y Los Guzmán recurren a mafias aliadas para apoyarlos en la contienda que se desarrolla en Culiacán, Sinaloa** (p. 4). El 03 de octubre fueron desplegadas por miembros de Los Guzmán al menos tres narcomantas en la ciudad de Culiacán en la que acusan a la mafia de Los Cabrera de extorsionar a personas en Durango y Zacatecas. El objetivo de Los Guzmán con este mensaje es generar interés de parte del Gobierno Federal para desmantelar a esa mafia y evitar que envíe personal y recursos a sus rivales de Los Zambada, ahora liderados por Ismael Zambada Sicaños (a) "El Mayo Flaco". En el corto plazo, es improbable que la narcomanta incida en la decisión del Gobierno Federal de actuar en contra de Los Cabrera, pero se puede vislumbrar que gradualmente aumentará el número de miembros de grupos criminales foráneos involucrados para ayudar a alguna de las dos facciones con las que estén aliadas.
- **Ante el abatimiento de ocho migrantes en Chiapas, el gobierno federal consigna a FGR la investigación de mandos militares** (p. 5). El ataque militar del 2 de octubre de 2024, en la frontera entre Tapachula y Tecún Umán, resultó en la muerte de ocho migrantes, que subraya la crisis de violencia en la entidad y el riesgo creciente para las poblaciones migrantes. Según la versión oficial, elementos de SEDENA, al responder a reportes de personas armadas, disparó en contra de vehículo en movimiento con un saldo de cuatro migrantes muertos en el lugar y cuatro más fallecidos en el hospital, procedentes de países como Honduras, Perú y Egipto. Este suceso marca la primera masacre en la administración de Claudia Sheinbaum, quien ha señalado la activación de un proceso civil para los militares involucrados, en contraste con la impunidad registrada en casos de violencia extrajudicial. La confusión entre migrantes y miembros del crimen organizado pone de relieve los peligros de la militarización de las operaciones de seguridad. Este contexto, junto con la posibilidad de un incremento en el flujo migratorio por las promesas de deportación de Donald Trump, genera un escenario de riesgo que podría derivar en una crisis humanitaria mayor en el sur de México.
- **Asesinato del presidente municipal y funcionarios del nuevo ayuntamiento de Chilpancingo genera crisis de gobernabilidad en Guerrero** (p. 7). En tres hechos diferentes fueron asesinados en un lapso de diez días el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento y quien sería designado secretario de seguridad pública. El hecho que generó una gran conmoción y repudio fue la decapitación del presidente

Alejandro Arcos, por el claro mensaje de impunidad que el crimen organizado ha decidido enviar a autoridades y sociedad. Aun cuando los crímenes no se le han adjudicado a ningún grupo criminal, resulta evidente que la disputa por el control del gobierno municipal por parte del crimen organizado alcanzó nuevos niveles de descomposición. La anterior presidenta municipal de Chilpancingo fue acusada de mantener diálogo y negociaciones con el grupo de Los Ardillos (de hecho, la presidenta fue expulsada de Morena por este motivo a principios de septiembre de este año). El estado de Guerrero registró el más alto nivel de violencia política en el país en el pasado proceso electoral, resulta preocupante que los grupos criminales pongan en riesgo la gobernabilidad y la tranquilidad social. En el caso de Chilpancingo, es altamente probable que el acuerdo de no agresión entre grupos criminales alcanzado por mediación de la Iglesia, se haya roto, poniendo en riesgo de una nueva oleada de violencia a toda la población. Existe la posibilidad de que la población emprenda acciones de resistencia civil ante la ineficacia de las autoridades para resolver estos crímenes.

- **Escala guerra entre cárteles por apoderarse de Guanajuato; pese a operativos y aprehensiones, autoridades estatales no logran detener ola de violencia** (p. 10). Durante los primeros días de octubre, los hechos violentos han escalado en Salamanca, con al menos 16 víctimas derivadas de las pugnas entre grupos del crimen organizado. El día 1º se registró un ataque armado a un centro de rehabilitación de adicciones en donde cuatro personas murieron, cinco fueron lesionadas y otras cuatro, secuestradas. El hecho volvió a evidenciar la clandestinidad de estos lugares, así como los continuos ataques armados de que son objeto. Otras 12 personas fueron asesinadas el día 3 en diferentes zonas de la ciudad. El presidente municipal informó que dentro de las víctimas se identificaron a internos y personal del centro de rehabilitación violentado. Autoridades del estado han dicho que la violencia deriva de las pugnas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, pero no han explicado la irregularidad de los centros de rehabilitación ni los ataques a éstos. El territorio guanajuatense continúa siendo prioritario para el crimen organizado, no solamente por el trasiego y venta de drogas, sino por el robo de combustible, por lo que no se espera que la violencia cese en el corto plazo.
- **Empresario de la construcción es asesinado en Tlaxcala, entidad con presencia de múltiples organizaciones criminales locales** (p. 13). El pasado 27 de septiembre fue hallado el cuerpo de Roberto Pérez de la Rosa en el municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, quien había sido secuestrado un día antes en Chiautempan, Tlaxcala. El cuerpo de la víctima fue encontrado junto a un narcomensaje que relacionaba su muerte con el mal manejo de cuatro millones de pesos. Aunque se desconoce la organización criminal que estuvo detrás de este delito, Tlaxcala es un municipio con al menos 15 organizaciones criminales registradas. En los municipios contiguos al lugar de los hechos operan Los Hechiceros y Los Negros, banda subordinada al CJNG. Este asesinato

constituye una señal de alarma para el gobierno del estado, quien deberá reconocer la presencia de grupos criminales como primer paso para impedir que se consoliden en organizaciones más complejas en cuanto a su presencia territorial y giros delictivos.

- **Clara Brugada tendrá el reto de mantener y profundizar las tendencias positivas en materia de seguridad del gobierno anterior en la Ciudad de México** (p. 14). La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para el período 2024-2030, Clara Brugada Molina, asumió el cargo el pasado sábado cinco de octubre con la promesa de dar continuidad a las estrategias de seguridad aplicados durante la administración anterior, entre cuyos resultados se encuentran una disminución de delitos de alto impacto, incluyendo homicidios, robos, feminicidios, extorsiones y secuestros (más del 45% con respecto al inicio de la administración); y también de alto impacto, siendo la reducción, en general, de más del 60%. El principal reto de la nueva mandataria en materia de seguridad será mantener las tendencias positivas en disminución de delitos, y, en especial, hacer frente a las extorsiones y a las desapariciones.
- **Los mayores desafíos en seguridad se enfrentan en las Regiones Militares I (CDMX, Hidalgo, Estado de México, y Morelos) y II (Baja California, Baja California Sur, y Sonora)** (p. 16). Lantia Intelligence presenta un análisis de los principales indicadores de seguridad pública (víctimas letales del crimen organizado, incidencia por cada 100 mil habitantes de los delitos considerados como de alto impacto social, población que indica sentirse inseguro en su estado y que percibe como corrupto al Ejército y a la Guardia Nacional) en 2024 para cada una de las 12 regiones militares en las que se divide México. Son cuatro regiones militares las que enfrentan los mayores desafíos al presentar el mayor número de indicadores por arriba de la cifra nacional: la Región I, II, XI, y XII. De dichas regiones, la I (compuesta por CDMX, Hidalgo, Estado de México, y Morelos) y II (Baja California, Baja California Sur, y Sonora) sobresalen con la mayor incidencia en por lo menos el 78% de los indicadores revisados.

Detenciones y abatimientos destacados:

- **CDMX, 29 de septiembre:** Fue capturado un sujeto conocido como "El Mocos", presunto miembro del grupo delictivo **Los Pedros**. Se le asocia con robos, extorsión y narcomenudeo.
- **CDMX, 1 de octubre:** Raúl "Racafa", operador del **Cártel Nuevo Imperio**, fue detenido por su implicación en el asesinato de Milton Morales, coordinador de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales. La investigación revela que "Racafa" ordenó la ejecución debido a la presión que Morales ejercía sobre sus actividades ilícitas.
- **Guanajuato, 2 de octubre:** Un individuo conocido como Don Pedro, presunto jefe de plaza del **Cártel de Santa Rosa de Lima**, fue arrestado en Dolores Hidalgo. Se le vincula con el robo y comercialización de hidrocarburos, así como con extorsiones.

ANÁLISIS



Los Zambada y Los Guzmán recurren a mafias aliadas para apoyarlos en la contienda que se desarrolla en Culiacán, Sinaloa

DINÁMICA CRIMINAL

El 03 de octubre, miembros de Los Guzmán del Cártel de Sinaloa desplegaron narcomantas en al menos tres puntos de Culiacán, en las que se acusa a presuntos miembros de la mafia de Los Cabrera de ser los responsables de la violencia en los estados de Durango y Zacatecas y de extorsionar a empresarios de múltiples sectores productivos. El despliegue de las narcomantas se da en el contexto de la contienda entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa —Los Guzmán y Los Zambada— tras la supuesta traición de los hijos de Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”, que llevó a la entrega al Gobierno de Estados Unidos de Ismael Zambada García (a) “El Mayo”.

Los Cabrera son una mafia regional del Cártel de Sinaloa que tiene presencia en Chihuahua, específicamente en las regiones Hidalgo del Parral y Delicias —que incluye los municipios de Balleza, Coronado, Guadalupe y Calvo, Jiménez, Matamoros, San Francisco del Oro y Santa Bárbara, así como en Durango —Cuencamé y Mezquital.

- Esta mafia fue fundada por cuatro hermanos que contaban con el respaldo de “El Mayo”: Luis Alberto, Alejandro (a) “El 02”, Felipe (a) “El Inge” o “El Rey de la Heroína”, y José Luis Cabrera Sarabia (a) “El JL”. Si bien Luis Alberto fue abatido en 2012 en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y dos más, detenidos, “El 02” en 2013 y “El Inge” en 2011 y extraditado en 2015, ésta continúa siendo una poderosa aliada de la facción de Los Zambada. En las narcomantas que fueron halladas esta semana se menciona a “El 02” y a “El JL” como líderes actuales, aunque sólo se reconoce a José Luis como el último hermano libre.
- Bajo las órdenes y el respaldo de “El Mayo”, los cuatro hermanos instalaron un lucrativo negocio de siembra y tráfico de marihuana y amapola (goma de opio) en la zona de Chihuahua y Durango, pero también es cierto que están involucrados en otros delitos como la extorsión o el secuestro.
- Al igual que otras mafias integrantes del Cártel de Sinaloa, ésta se mantiene del lado de Los Zambada —de ahí que Los Guzmán hayan colocado las lonas con el objetivo de solicitar a las autoridades su detención—, pero tienen a sus principales rivales con la familia Núñez Meza, otra mafia criminal del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.

Se presume que estas acciones responden a un intento de parte de Los Guzmán de generar interés de parte del gobierno federal de realizar acciones en contra de colaboradores de sus rivales para mejorar sus oportunidades de conseguir la victoria en la contienda que actualmente se desarrolla.

- Todo parece indicar que tanto Los Guzmán como Los Zambada han solicitado a sus mafias asociadas que envíen personal para sostener la disputa con Los Guzmán que actualmente se desarrolla en Culiacán, Sinaloa.
 - Apenas el 02 de octubre, seis personas fueron halladas muertas en el interior de una camioneta con una pinta que indicaba “Bienvenidos a Culiacán”. Al menos dos de los cadáveres pertenecían a personas procedentes de Durango, pero es probable que el resto también hayan sido foráneos.
- Si bien no se tiene información precisa sobre qué agrupaciones apoyarían a qué facción, se puede presumir, por ejemplo, que la familia Núñez Meza y Los Salgueiro —mafias criminales asociadas a Los Guzmán en Chihuahua y acérrimos rivales de Los Cabrera— podrían haber aportado algún tipo de apoyo a Los Guzmán.

Se presume que la contienda entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa continuará durante los próximos meses, aún con importantes pérdidas en su territorio (121 asesinatos en el contexto de la contienda en septiembre), pues éstos pueden recurrir a sus mafias aliadas para solicitar personal y armamento para continuar la disputa.



Ante el abatimiento de ocho migrantes en Chiapas, el gobierno federal consigna a FGR la investigación de mandos militares

RIESGO SOCIAL

El 1 de octubre de 2024, un operativo militar en la frontera entre Tapachula (México), y Tecún Umán (Guatemala), resultó en la muerte de ocho migrantes. Tras recibir reportes de personas armadas, efectivos del Ejército mexicano interceptaron tres vehículos cerca de Villa Comaltitlán, Chiapas. Según la versión de las autoridades, estas personas armadas abrieron fuego, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que 33 migrantes fueron hallados en uno de los vehículos, cuatro de ellos fallecidos en el lugar. Otros doce resultaron heridos, de los cuales cuatro murieron posteriormente en el hospital de Huixtla. Las víctimas letales eran originarias de Honduras, Perú, Egipto y El Salvador, mientras que los heridos provenían de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto. La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a dos militares involucrados en los disparos y ha solicitado el apoyo de Interpol y las autoridades guatemaltecas para continuar con la investigación. Este incidente ocurrió en una zona crítica para las rutas migratorias desde Guatemala, recrudeciendo el riesgo constante para los migrantes que intentan cruzar México. Días después, se publicaron notas en la prensa internacional y denuncias de ONGs exigiendo una revisión de las estrategias de control fronterizo. De igual manera, el gobierno de Perú condenó los hechos y exigió una investigación exhaustiva por parte del gobierno mexicano.

Este incidente marca el primer caso de violencia de alto impacto (masacres por involucrar más de cuatro asesinados) bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el suceso como "lamentable" en su conferencia del 3 de octubre. Informó que

dos militares, incluido el comandante de la operación, fueron puestos a disposición de la FGR, un hecho significativo dado que, en incidentes anteriores, la investigación de la violencia extrajudicial se limitaba a la policía militar y al Ministerio Público Militar, restringiendo la intervención de la justicia civil. Este cambio sugiere una intención de aplicar un proceso civil contra los militares involucrados, un enfoque novedoso en el contexto de la militarización de la estrategia de seguridad nacional en los últimos años. La SEDENA emitió un comunicado el 2 de octubre, informando que los soldados responsables fueron separados de sus funciones y se notificó a la Fiscalía, reafirmando su compromiso con el estado de derecho y la cero impunidad. Aunque la SEDENA reconoce la responsabilidad del ataque, lo atribuye a la confusión de los migrantes con integrantes del crimen organizado. Este evento resalta el riesgo inherente al uso de fuerzas militares en operativos de seguridad pública, donde la lógica marcial y su poder de fuego contrastan con la vulnerabilidad social en Chiapas. Sin embargo, hay indicios de que podría seguirse un debido proceso, lo que sería un hito en la estrategia de seguridad y justicia de la nueva administración.

El recrudecimiento de la violencia en la frontera entre México y Guatemala en 2024 ha exacerbado los riesgos para las poblaciones migrantes en Chiapas, donde las organizaciones criminales han ampliado su control territorial mediante hechos de violencia de alto impacto. En municipios como Amatenango de la Frontera y Frontera Comalapa, se han reportado secuestros masivos de migrantes por parte de grupos como el Cártel del Ancla, que retiene a cientos de personas en condiciones inhumanas, exigiendo rescates por cada víctima. Estas organizaciones utilizan centros improvisados como "La Gallera" para encarcelar a migrantes, incluidas mujeres y niños. La violencia y la impunidad con la que operan estos grupos han obligado a miles de mexicanos a huir hacia Guatemala. Según la ONU, la crisis migratoria en Chiapas se inscribe en el contexto de una emergencia humanitaria global. A pesar de la presencia de fuerzas federales, las autoridades han fallado en garantizar la seguridad de las comunidades locales y migrantes, subrayando la necesidad urgente de reformas profundas en las instituciones de seguridad y justicia en el estado. En particular, se espera que pueda haber cambios en la estrategia del Instituto Nacional de Migración mexicano de manera a tener una mejor gobernabilidad de la crisis migrante bajo la actual administración.

Cabe destacar que, ante el escenario de una posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, se podría desatar un aumento en el flujo migratorio en la frontera sur de México. Ante la promesa de Trump de "sellar la frontera" desde el primer día de su mandato y continuar con la construcción del muro, se anticipa un aumento considerable en la migración antes del inicio del nuevo gobierno el 20 de enero de 2025. Miles de migrantes, temiendo quedar atrapados en territorio mexicano, podrían intentar cruzar antes de que las medidas más estrictas entren en vigor, lo que incrementaría la presión en los territorios fronterizos mexicanos. Esta situación podría provocar una crisis humanitaria con albergues desbordados y tensiones sociales en las comunidades locales. La propuesta de deportación masiva de Trump también agravaría el problema, ya que

México tendría que gestionar un número creciente de personas retornadas desde EE.UU. La combinación de fronteras cerradas, un flujo migratorio descontrolado y la falta de recursos para atender a los migrantes generaría no solo un colapso logístico, sino también tensiones políticas entre ambos países.

Dentro de este contexto de conflictividad, destaca la situación en Pantelhó en la región serrana, donde grupos armados como El Machete y "Los Herrera" compiten por el control político y económico del municipio. La reciente manifestación de habitantes de 85 comunidades, apoyados por El Machete, en el Congreso del Estado de Tuxtla Gutiérrez, reveló la tensión entre las demandas de la comunidad y las decisiones del gobierno estatal. Los manifestantes exigen el reconocimiento de un concejo municipal electo por plebiscito en febrero, que no ha sido validado por la legislatura actual, acusando a los miembros designados por los diputados salientes de tener antecedentes violentos. Este conflicto no solo se traduce en una lucha por el poder local, sino que también refleja la falta de legitimidad en las autoridades impuestas por autoridades estatales, las cuales son vistas como cómplices de grupos del crimen organizado. Es muy posible que la designación del nuevo concejo, encabezado por Juan Gómez Sántiz, tendrá repercusiones violentas. Hay señales para pensar que estas manifestaciones se transformen en actos violentos contra autoridades, lo cual podría exacerbar el desplazamiento de familias.



Asesinato del presidente municipal y funcionarios del nuevo ayuntamiento de Chilpancingo genera crisis de gobernabilidad en Guerrero

VIOLENCIA POLÍTICA

Tres funcionarios de alto rango en la estructura del recién instalado ayuntamiento de Chilpancingo, fueron asesinados en el transcurso de los últimos diez días. El más reciente de los casos sucedió el domingo 6 de octubre por la tarde cuando el presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán fue hallado decapitado, su cabeza sobre al techo de un vehículo y su cuerpo al interior del mismo, en la zona poniente de la ciudad. Destaca la forma tan violenta y de alto impacto social y mediático en la ejecución sobre un funcionario electo por voto popular en las pasadas elecciones.

Por otra parte, la tarde del jueves 3 de octubre fue asesinado a balazos Francisco González Tapia, secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, en zona centro de la ciudad. Según los peritajes, el ex funcionario recibió cuatro impactos de bala: dos en la cabeza y dos más por la espalda. Por las características de homicidio se trató también de una ejecución. Sobre este asesinato, el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, alcanzó a declarar a medios su condena por el crimen, exigió justicia, solicitó reforzar su protección personal y de sus funcionarios, y comentó que no había recibido amenazas o presión de algún grupo delincuencia. Ambos funcionarios habían tomado posesión el pasado 30 de septiembre en sesión pública del Cabildo.

Cabe destacar que este nuevo gobierno municipal obtuvo la victoria electoral bajo la coalición PRI-PAN-PRD, sin embargo, la trayectoria del presidente y secretario del ayuntamiento se habían dado fundamentalmente a través del PRD. Apenas en septiembre, González Tapia había sido nombrado parte de una comisión del PRD que analizaba el procedimiento para convertirse en partido local.

Por último, en un tercer evento registramos el viernes 27 de septiembre el asesinato de Ulises Hernández Martínez, quien había sido designado para ocupar la secretaría de seguridad pública municipal, y se había desempeñaba como capitán de Infantería del Ejército y director de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en 2018. Este atentado se realizó cuando viajaba en su vehículo en la zona centro de Chilpancingo junto con una acompañante que también falleció, al salir de una reunión relacionada con el proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, cargo que ya no pudo asumir. En los tres casos es altamente probable que el crimen organizado presionó para hacer cumplir sus condiciones, y al no obtener las respuestas deseadas fue escalando la violencia de sus acciones. Por la existencia de dos grupos antagónicos en la disputa de Chilpancingo, es probable que estos crímenes desaten una nueva oleada de violencia al no haber acuerdo sobre las designaciones, generando violencia que pone en riesgo la gobernabilidad de la ciudad, y probablemente de la entidad.

- En otro evento de violencia política, el miércoles 2 de octubre, el exregidor de Morena de Atoyac de Álvarez en el período 2018-2021, Juan Carlos Reyes Téllez, fue asesinado afuera del panteón municipal de esa localidad. Cabe señalar, que el 13 de junio de este año ya había sido atacado a balazos, en ese atentado falleció su esposa cuando circulaban en su automóvil en el zócalo de la cabecera municipal. En julio de 2019 había sido baleado en un tramo de la carretera entre Tecpan de Galeana y San Jerónimo. Este crimen es relevante ya que el sábado 5 de octubre fueron encontradas en Atoyac de Álvarez, San Jerónimo y Tecpan, 13 mantas firmadas por la Federación Guerrerense llamando a realizar un frente contra la Nueva Familia Michoacana para terminar con los secuestros, extorsiones y cobros de piso en la región.
- Otro episodio de gobernabilidad pendiente de solución en el estado, se refiere a la decisión que tome el Congreso del estado ante la falta de presidente municipal en Copala un municipio de la Costa Chica. Cabe señalar que el pasado 17 de junio fue asesinado en un autobús en Acapulco el candidato electo del Partido México Avanza, capitán de fragata Salvador Villalba Flores, y que un día antes de la toma de posesión, fue detenido el también teniente de fragata retirado y presidente municipal suplente, Rogelio Lozano Pérez acusado de participación en el delito de desaparición de personas. El presidente suplente e indirectamente su equipo de trabajo tenían medidas cautelares con protección de la Guardia Nacional desde el asesinato del presidente

electo; a pesar de este resguardo policiaco el 18 de agosto fue asesinado en el centro del poblado de Cruz Grande su asesor jurídico, el abogado Julián Saligán Rojas. El proceso de entrega recepción fue suspendido, y los funcionarios de la anterior presidenta municipal con licencia, Guadalupe García Villalba (ahora diputada local por Morena), están a la espera de esta designación para culminar su entrega. En el Congreso se contemplan opciones como el nombramiento de un presidente interino entre los familiares del candidato electo asesinado. A una semana del inicio de las administraciones municipales, en Copala aún no se designa un presidente municipal.

- En relación a este mismo caso de Copala registramos que en abril de 2024 la candidata del PVEM Candy Espinoza Ríos, tuvo que huir de Copala después de que su esposo fue secuestrado y amenazado para que su esposa se retirara de la contienda electoral. Candy Espinoza había sido designada candidata en sustitución de su hermano Jesús González Ríos quien fue asesinado el 27 de junio de 2023 y que era el precandidato del PVEM para el cargo de presidente municipal. Jesús González dejó un video donde responsabilizaba a la entonces presidenta municipal de Morena de su seguridad personal. En la contienda local de junio de 2024 el PVEM no postuló candidato.

Respecto a los asesinatos de los funcionarios municipales de Chilpancingo, ningún grupo criminal se ha adjudicado las ejecuciones. Sin embargo, por los antecedentes existentes en la anterior administración municipal de Chilpancingo encabezada por la morenista Norma Otilia Hernández, quien fue acusada de mantener diálogo y acuerdos con grupos criminales (fue expulsada de Morena por este motivo el 7 de septiembre de este año), es muy probable que estas ejecuciones obedezcan a la presión de los grupos criminales para lograr hacer prevalecer sus privilegios y mantener sus cotos de actividad. No es posible establecer al día de hoy qué grupo criminal está detrás de estos hechos, sin embargo, es probable que las diferencias entre Los Ardillos y Los Tlacos que se disputan el territorio de la capital, y que habían alcanzado un acuerdo de no agresión con la mediación de la iglesia desde enero de este año, comiencen una nueva ola de violencia por la disputa abierta por el control de las nuevas autoridades municipales. Al respecto la Iglesia no se ha pronunciado aún sobre estos asesinatos, aunque la sociedad civil está convocando a manifestaciones para exigir justicia el próximo jueves 10 de octubre.

El gobierno municipal que apenas inició su gestión el pasado 1 de octubre, entró rápida e inesperadamente en una fase de crisis por la escalada de violencia que dejó ácefa a la institución. El presidente municipal suplente manifestó que no asumirá el cargo, por lo que el Congreso del estado deberá resolver nombrando un presidente interino o sustituto según lo considere conveniente. Estos asesinatos representan un desafío para las instituciones de gobierno estatales y para la propia sociedad en un nivel no experimentado anteriormente. El cambio en la filiación partidista del nuevo presidente municipal, anteriormente de Morena, y hoy opositor, representa un dato relevante en la explicación del nuevo escenario local. Chilpancingo fue la cuarta ciudad con mayor violencia política del país, en el pasado proceso electoral.

De acuerdo con la Plataforma de Lantia Intelligence en Chilpancingo operan siete organizaciones criminales: Los Tlacos, Los Ardillos, CJNG, El Cartel del Sur, La Nueva Empresa, La Federación Guerrerense, y los remanentes de Los Rojos. En principio el grupo de Los Ardillos ha operado en territorios dominados políticamente por el PRD, mientras que Los Tlacos se concentraban en territorios donde anteriormente gobernaba el PRI, y que ahora gobierna Morena. Este patrón ha sido consistente únicamente en los municipios de la región centro y de la montaña baja de Guerrero. Se estima que pueda haber nuevos hechos de violencia en el corto plazo, desafortunadamente los antecedentes señalan que el diálogo y los acuerdos con los grupos delincuenciales han sido necesarios para mantener bajo cierto control la violencia en la región. Las demandas sociales de justicia podrían intensificarse a un grado de poner en riesgo la estabilidad del gobierno estatal.

Escala guerra entre cárteles por apoderarse de Guanajuato; pese a operativos y aprehensiones, autoridades estatales no logran detener ola de violencia

RIESGO DE SEGURIDAD

El 01 de octubre, supuestos miembros del crimen organizado atacaron un centro de rehabilitación ubicado a las afueras de Salamanca. Hombres armados llegaron al lugar, derribaron los portones con los vehículos en los que se trasladaban y dispararon tanto a personal e internos. El ataque dejó cuatro muertos, cinco lesionados y se dijo que cuatro personas fueron secuestradas, incluyendo a la encargada y a la dueña del lugar.

El presidente municipal morenista, César Prieto Gallardo, fue quien informó que luego del ataque al “aparente anexo”, se montó un operativo y una persecución por parte de la Guardia Nacional (GN) y policía municipal, sin embargo, los delincuentes lanzaron ponchallantas y lograron escapar. Hasta el momento, ni él ni ninguna otra autoridad en el estado han emitido un informe oficial sobre los motivos del ataque y el saldo preciso que incluya al número de personas que fueron secuestradas.

Por su parte, Nicolás Pérez Ponce, representante de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), fue quien señaló que, de acuerdo a testigos, la encargada y la dueña del lugar habían sido privadas de la libertad, junto a otras dos personas. Asimismo, explicó que este anexo no había reportado que se encontrara bajo alguna amenaza. Lo que indica que estos lugares presentan estas problemáticas continuamente.

El día 03, otras 12 personas fueron asesinadas en al menos cuatro zonas distintas de Salamanca, y según autoridades estos crímenes estarían vinculados con el ataque al anexo: 1) En la comunidad de Valtierra se reportó el hallazgo de los cuerpos de una mujer y un hombre; 2) En la zona conocida como La Cruz, se localizaron a tres varones sin vida, y un poco al sur de este hallazgo, se encontró el cadáver de otro individuo. Cabe destacar que todos estaban maniatados, contaban con heridas de arma de fuego y estaban acompañados de narcomensajes firmados por el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). 3) En

la comunidad de Cerro Gordo, se hallaron dos cuerpos desmembrados en un parque, y 4) en la localidad de Los Lobos, se reportó un ataque armado que dejó un saldo de dos hombres y dos mujeres sin vida.

Prieto Gallardo informó que entre los fallecidos se encontraban internos y personal del centro de rehabilitación que habían sido reportados como desaparecidos, sin precisar quiénes eran.

El ataque al anexo destaca no solamente porque se da a sólo unas horas de que la nueva gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, habría empezado labores en el estado, y quien hasta ahora no ha hecho ningún pronunciamiento, así como también por evidenciar la proliferación de centros de rehabilitación clandestinos en el país. Esta irregularidad se ha hecho presente en el estado, ya que, según fuentes abiertas, en Guanajuato existen alrededor de 300 de éstos, sin embargo, sólo 13 cumplen con la normatividad correspondiente.

En los últimos años, los ataques a estos anexos en Guanajuato han sido constantes: en julio del 2020, más de 20 personas fueron asesinadas a sangre fría y otras 7 lesionadas en un anexo de Irapuato (fue el segundo ataque en ese municipio durante ese año); en León, se registraron dos ataques en enero y noviembre del 2021 con al menos dos fallecidos; en Celaya, balearon estos lugares en enero y septiembre del 2023 dejando un saldo de más de 4 muertos.

Aunque no existe un informe oficial por parte de las autoridades sobre los motivos para estos ataques, una de las teorías indica que los anexos están siendo utilizados como centros de reclutamiento y venta de drogas para el crimen organizado, principalmente para el CJNG, que parece tener una mayor presencia en las áreas urbanas, mientras que el CSRL tiene más actividad en el área rural. Las autoridades no han revelado en qué lugar aparecieron los cuerpos de las personas levantadas del anexo, pero los mensajes amenazantes firmados por el CSRL y dirigidos a quien trabaje para el CJNG, ("halcones, tienderos, huachicoleros" e incluso personal de gobierno), servirían de evidencia para reforzar esta teoría.

Ante la clandestinidad en sus operaciones, estos lugares son poco vigilados no solamente ante ataques violentos sino incluso en el proceso de trabajo que tienen y el tipo de tratamiento que dan a sus internos. En todo el país han existido casos de abuso en contra de los pacientes por parte de los mismos padrinos (personal que trabaja en el lugar), y continuamente se presentan casos de muertes de internos que pocas veces son esclarecidos.

El presidente de CRUB argumentó que es necesario que las autoridades estatales entiendan la vulnerabilidad en la que trabajan los centros de rehabilitación (clandestinos o no) para que la violencia en contra de ellos pueda disminuir.

El munícipe Prieto Gallardo reconoció que la violencia entre los anexos podría escalar como reacción por parte de otro grupo (CJNG), por lo que se han puesto en marcha operativos

para prevenir nuevos ataques armados. A través de redes sociales, el secretario de gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona, informó que llegaron 400 elementos del Ejército y la GN, a petición de los gobiernos estatal y municipal.

También, durante una entrevista, atribuyó estos hechos violentos a las pugnas entre el CSRL y el CJNG por el control del estado: “Hay una disputa, es importante señalarlo, entre dos grupos de delincuencia organizada, están haciendo ellos sus actividades. Sí, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación”.

Por otra parte, el 01 de octubre fue detenido Pedro “N” (a) “Don Pedro”, presunto jefe de plaza del CSRL en el municipio de Dolores Hidalgo e implicado en los delitos de robo, extorsión a autoridades y comercialización de hidrocarburo (huachicoleo) bajo las órdenes de Karem Lizbeth (a) “La Señora”, hermana de José Antonio Yépez, (a) “El Marro”, presunto líder del cártel y quien fuera detenido en 2020.

Según fuentes abiertas, la aprehensión de “Don Pedro” responde a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum de los primeros 100 días del Gobierno, que tiene el objetivo de capturar a generadores de violencia en diferentes puntos del país.

De acuerdo a investigaciones, se sabe que el CSRL mantiene una nómina de autoridades municipales y estatales, que les permite realizar sus operaciones sin ser molestados. La corrupción de autoridades es un elemento más que dificulta la baja en los índices de violencia en el estado.

Apenas hace unos días se dio a conocer que el titular de la Fiscalía de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, presentó su renuncia después de 15 años de estar al frente de la institución. Su renuncia podría tener efecto a partir del 1 de enero de 2025 y hasta el momento no se ha dado un informe oficial ni los motivos de su salida.

Cabe destacar que Salamanca tiene más de un año sin secretario de Seguridad Pública, luego de la renuncia del excoronel de la Fuerza Aérea, Alejandro Flores Jiménez, en agosto de 2023. El cargo seguirá vacante ya que no se ha encontrado a la persona con el perfil ideal y que además logre superar las evaluaciones de control y confianza. Por el momento, es el secretario del Ayuntamiento, Jesús Guillermo García Flores, quien funge como encargado de despacho de Seguridad. Pero, según declaraciones del propio alcalde “ya no quiere estar como director de Seguridad Pública, sin embargo, pues tiene la responsabilidad...”

La situación de violencia en Salamanca y en el estado en general no mejorará en el corto plazo. El crimen organizado se encuentra fuertemente arraigado no solamente por sus actividades de trasiego de droga y el huachicoleo, sino también por los delitos que derivan de ellas, como el robo a autotransporte, el secuestro y la extorsión, por lo que se requiere de una estrategia conjunta entre los gobiernos municipal, estatal y federal, más allá de las diferencias partidistas que hasta el momento parecen ser una gran barrera para el trabajo de seguridad.

Por el momento, es la población de Salamanca la que se mantiene con el temor de más ataques y hechos de violencia entre un grupo y otro, aunque Prieto Gallardo indicó que la violencia no está dirigida a los habitantes y que parte de las amenazas que han circulado en redes sociales, solamente tienen el objetivo de generar pánico.

También es importante que se preste atención a la regulación de estos centros de rehabilitación y a una política para el tratamiento de adicciones en el país, ya que, ante el incremento de estas problemáticas, las familias de escasos recursos no tienen más alternativa que enviar a sus familiares a este tipo de lugares sin exigir una regulación o un informe sobre las terapias utilizadas. Es importante recordar que México ya no solamente es territorio de paso de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, sino que en los últimos años se ha visto un incremento en las adicciones a éstas, principalmente en donde los grupos del crimen organizado mantienen fuerte presencia.



Empresario de la construcción es asesinado en Tlaxcala, entidad con presencia de múltiples organizaciones criminales locales

RIESGO PARA SECTOR EMPRESARIAL

El pasado 27 de septiembre fue hallado el cuerpo del empresario Roberto Pérez de la Rosa en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 107, en el municipio San Miguel Xoxtla, Puebla. El empresario, originario de Veracruz, había sido reportado como desaparecido el pasado 26 de septiembre. Pérez de la Rosa se encontraba en Chiautempan, Tlaxcala, cenando en un restaurante en la calle Gran Avenida, cuando fue abordado por dos hombres armados, quienes le dispararon en una pierna para inmovilizarlo, y luego procedieron a subirlo a una camioneta Honda CRV para secuestrarlo. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura y acompañado de un narco mensaje clavado en su pecho: “Esto me pasó por hacer marchas de \$4,000,000 que no eran tuyos y los robaste (sic)”. Dedicado a la industria de la construcción, Roberto Pérez de la Rosa, de 44 años, radicó en Tlaxcala por más de veinte años, aunque se desconoce la naturaleza exacta de su ámbito empresarial. Luego de la noticia de su fallecimiento, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Tlaxcala extendió sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. A esta lamentación se sumó la senadora por Tlaxcala Anabel Ávalos Zempoalteca, quien urgió a las autoridades de su entidad a reforzar la seguridad para evitar que este tipo de actos se repitan en el futuro.

La Fiscalía no ha ofrecido una explicación pública sobre el móvil detrás del delito, y tampoco sobre el posible actor agresor. La única pista disponible es el mensaje que acompañó a la víctima, haciendo alusión a que Pérez de la Rosa tuvo un mal manejo de recursos, pero no a que debiera dinero a alguna organización criminal. Tlaxcala no está libre de organizaciones criminales que operan en su territorio. Según la plataforma de Lantia Intelligence, 15 organizaciones criminales operan en Tlaxcala: Sangre Nueva Zeta, Banda del Loco Téllez, Los Zetas Vieja Escuela, la Mara Salvatrucha, Los Meléndez, Familia Granados,

Familia Hernández, Familia Rojas Romero, La Nueva Empresa, Unión Tepito, Los Chumacero, Los Flacos, Los Hechiceros, Guerreros Unidos y Los Negros.

Aunque no hay registro de la presencia de organizaciones criminales en Chiautempan, municipio donde el empresario Pérez de la Rosa fue secuestrado y probablemente asesinado, sí en municipios aledaños. En Zitlaltepec e Ixtenco operan Los Hechiceros, una banda local cuyo giro delictivo más común es el robo a ferrocarril y transportistas. En Xaloztoc y Huamantla también operan Los Hechiceros, y también Los Negros. Esta organización local ha evidenciado vínculos de subordinación a Cártel Jalisco Nueva Generación. Los Negros operan tanto en Tlaxcala como en Puebla. Por lo tanto, son una organización un poco más compleja y extensa que otras bandas locales de Tlaxcala, y sus principales giros delictivos son: narcomenudeo, extorsión, robo de combustible, trata de personas, robo de transportistas, contrabando y robo a casa habitación. Sin embargo, en tanto no aparezcan nuevas pistas sobre los posibles vínculos que tuviera el empresario con el crimen organizado local, será difícil atribuir la responsabilidad a alguna organización específica. El hecho, no obstante, constituye una alerta de seguridad para la clase empresarial local, y sobre todo para el gobierno del estado, que deberá reconocer la presencia de grupos criminales como primer paso para combatirlos e impedir que se constituyan como organizaciones más complejas en cuanto a su presencia territorial y a sus giros delictivos.



Clara Brugada tendrá el reto de mantener y profundizar las tendencias positivas en materia de seguridad del gobierno anterior en la Ciudad de México

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para el período 2024-2030, Clara Brugada Molina, asumió el cargo el pasado sábado cinco de octubre para dar continuidad a los logros de la administración anterior, entre los cuales se encuentran una importante disminución de delitos de alto impacto, incluyendo homicidios, robos, feminicidios, extorsiones y secuestros (más del 45% con respecto al inicio de la administración); y también de alto impacto, siendo la reducción, en general, de más del 60%.

Entre las propuestas en materia de seguridad que hizo la ya actual Jefa de Gobierno se encuentran: i) el mantenimiento de gabinetes de seguridad y el favorecimiento de la coordinación con el gobierno federal y las alcaldías, proponiendo su incorporación en las reuniones y estrategia de seguridad, así como con la Fiscalía General de la Ciudad de México y el poder judicial; ii) el fortalecimiento de las policías mediante el aumento de salarios y herramientas como cámaras de videovigilancia (ciudad más videovigilada de América Latina), drones, inteligencia artificial y, principalmente, el uso de Big Data, revisando las tendencias en delitos por colonias y alcaldías; iii) concentración en la detención de generadores de violencia con el propósito de disminuir los delitos por sobre la búsqueda del

desmantelamiento de estructuras delictivas (aunque esto también ocurra); iv) la habilitación de mil kilómetros de caminos de mujeres libres y seguras (programa iniciado en la administración de Claudia Sheinbaum); v) la instalación de alumbrado público con el propósito de convertirse en la ciudad más iluminada de América Latina; vi) favorecer la proximidad policial mediante el restablecimiento de puntos físicos de contacto como módulos de seguridad, estaciones y casetas de policía; vii) la participación ciudadana en la evaluación del desempeño de las policías; y viii) la realización de campañas de desarme.


Al frente de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México continuará Pablo Vázquez Camacho, quien relevó a Omar García Harfuch, con quien mantiene una cercana relación, por lo que la coordinación con el gobierno federal será favorecida. Vázquez Camacho es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres; también tiene estudios en delincuencia organizada en Sicilia y Macedonia. Ha ejercido distintos cargos en el Gobierno de México y en la Ciudad de México, entre los cuales destacan la titularidad temporal de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la FGR; y la de la Dirección de Investigación y Estrategias para la Prevención Social de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación.



La designación del próximo titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México será uno de los primeros retos a resolver, pues desde que Ernestina Godoy, anterior fiscal, dejó el cargo

por no ser ratificada por el congreso local en enero de este año, quien se ha desempeñado en el puesto de manera provisional ha sido Ulises Lara. En fuentes abiertas se han mencionado tres principales contendientes para ocupar el puesto: Bertha María Alcalde Luján (hermana de la actual presidenta de MORENA, abogada y maestra en derecho penal); Renato Sales Heredia (con larga trayectoria en organizaciones de seguridad y exfiscal de Campeche); y el propio Ulises Lara (quien continuaría en el puesto). Sin embargo, el nuevo nombramiento depende del congreso local, en el cual la coalición de la mandataria ocupa 43 curules de 66 (se necesitan 44 votos para mayoría calificada), por lo que el proceso podría demorar un poco (se espera que inicie el próximo lunes).

El principal reto de la nueva jefa de gobierno en materia de seguridad será mantener las tendencias positivas en disminución de delitos, y, en especial, hacer frente a las extorsiones y a las desapariciones. Pues si bien es cierto que la situación ha mejorado en los anteriores seis años, la Ciudad de México sigue teniendo importantes problemas con la alta presencia criminal, ya que se tienen registradas 79 organizaciones entre las que se encuentran La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, la Fuerza Anti-Unión Tepito, células del CJNG y el Cártel de Sinaloa, entre otras.



Los mayores desafíos en seguridad se enfrentan en las Regiones Militares I (CDMX, Hidalgo, Estado de México, y Morelos) y II (Baja California, Baja California Sur, y Sonora).

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

La Secretaría de la Defensa Nacional informó de recientes cambios en algunos mandos de las 12 regiones militares¹ (cinco ratificados y siete nombramientos). Lantia Intelligence presenta un análisis de los principales indicadores de seguridad pública en 2024 (enero a agosto) para cada una de las regiones militares. Los indicadores revisados son víctimas letales del crimen organizado (VLCO), incidencia por cada 100 mil habitantes de los delitos considerados como de alto impacto social (extorsión, homicidio doloso, contra la libertad y la seguridad sexual, robo de vehículo, y contra la libertad personal -tales como secuestro y otros), porcentaje de la población que indica sentirse inseguro en su estado, y porcentaje de la población que percibe como corruptos al Ejército o a la Guardia Nacional. Los principales hallazgos indican lo siguiente:

- El 67.0% de las VLCO se concentra en cinco regiones: la Región I (con 1,342 víctimas, lo que implica el 11.1%), la Región II (con 1,756 víctimas, es decir, 14.5%), la Región V (con 1,426

¹ Región I: CDMX, Hidalgo, Estado de México, y Morelos; Región II: Baja California, Baja California Sur, y Sonora; Región III: Durango y Sinaloa; Región IV: Nuevo León, San Luis Potosí, y Tamaulipas; Región V: Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, y Zacatecas; Región VI: Puebla, Tlaxcala, y Veracruz; Región VII: Chiapas y Tabasco; Región VIII: Oaxaca; Región IX: Guerrero; Región X: Campeche, Quintana Roo, y Yucatán; Región XI: Coahuila y Chihuahua; Región XII: Guanajuato, Michoacán, y Querétaro.

víctimas, implica el 11.8%), la Región XI (con 1,053 víctimas, y el 8.7%), y la Región XII (con 2,538 víctimas, y el 20.9%).

- Son cuatro regiones militares las que enfrentan los mayores desafíos con base al número de indicadores de seguridad pública cuyo nivel registrado supera el resultado a nivel nacional:

Indicadores de Seguridad en 2024

Región	VLCO	Por cada 100 mil habitantes					% Percepción Inseguridad	% Percepción de Corrupción	
		Extorsión	Homicidio doloso	La libertad y seguridad sexual	Robo de vehículo automotor	Libertad personal		Ejército	Guardia Nacional
I	1,342	9.8	9.7	55.4	105.3	21.5	78.9	28.8	33.1
II	1,756	2.4	29.6	69.8	123.8	28.6	58.4	28.2	33.8
III	336	1.9	7.3	35.1	44.3	19.1	50.3	23.7	26.1
IV	918	5.6	13.1	47.4	39.4	18.1	74.1	19.9	28.4
V	1,426	4.5	14.5	56.6	76.8	12.1	67.2	23.9	29.5
VI	520	4.4	7.3	30.9	68.0	8.7	72.8	24.4	30.6
VII	785	1.4	11.6	19.1	33.4	7.0	81.2	22.9	25.1
VIII	260	2.1	14.1	25.2	36.6	4.0	68.5	21.0	22.6
IX	819	2.6	27.3	16.8	47.8	6.4	81.0	21.9	20.8
X	362	3.2	9.8	45.8	48.5	20.7	57.9	27.1	29.2
XI	1,053	0.6	17.5	62.2	34.6	11.6	52.7	25.7	32.6
XII	2,538	7.6	19.9	35.0	67.3	3.6	73.8	25.5	33.8
Total	12,115	5.4	13.6	45.2	71.4	14.5	73.6	25.5	30.6

Fuente: Lantia Intelligence, 2024; SESNSP, 2024; INEGI-ENVIPE, 2024.

- Región I. Presenta ocho indicadores de los nueve revisados por arriba del resultado registrado a nivel nacional: VLCO con el 11.1% del total nacional, extorsión (con 9.8 por cada 100 mil habitantes), delitos contra la libertad y seguridad sexual (55.4), robo de vehículo (105.3), contra la libertad personal (21.5), el promedio del porcentaje de la población que indica sentirse insegura en los estados de la región es del 78.9, y el de la población que percibe como corruptos al Ejército es del 28.8 y de la Guardia Nacional del 33.1.
- Región II. Con siete indicadores por arriba del resultado registrado a nivel nacional: VLCO con el 14.5% del total nacional, homicidio doloso (con 29.6 por cada 100 mil habitantes), delitos contra la libertad y seguridad sexual (69.8), robo de vehículo (123.8), contra la libertad personal (28.6), el promedio del porcentaje de la población

de los estados de la región que percibe como corruptos al Ejército es del 28.2 y de la Guardia Nacional del 33.8.

- Región XI. Presenta cinco de los nueve indicadores revisados por arriba del resultado registrado a nivel nacional: VLCO con el 8.7% del total nacional, homicidio doloso (con 17.5 por cada 100 mil habitantes), delitos contra la libertad y seguridad sexual (62.2), y el promedio del porcentaje de la población de los estados de la región que percibe como corruptos al Ejército es del 25.7 y de la Guardia Nacional del 32.6.
- Región XII. Con cinco indicadores por arriba del resultado registrado a nivel nacional: VLCO con el 20.9% del total nacional, extorsión (con 7.6 por cada 100 mil habitantes), homicidio doloso (19.9), el promedio del porcentaje de la población que indica sentirse insegura en los estados de la región es del 73.8, y el de la población que percibe como corruptos a la Guardia Nacional del 33.8.